

RESOLUCIÓN No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL

**EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE",**

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO

Que a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la Ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

Que el Director General de Cornare, mediante la Resolución No. 05191-2021 del 5 de agosto, delegó unas funciones al jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación

SITUACION FÁCTICA

Que mediante Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre N° 0193859 con radicado PPAL-CE-00168-2021 del día 06 de enero de 2021, fueron puestos a disposición de Cornare, cero punto veintiséis (0.26) metros cúbicos de madera Ciprés (*Cupressus lusitanica*) y una motosierra marca STIHL MS 170 Numero de referencia 11300213001, que fueron incautados por la Policía Nacional, el día 04 de enero del año 2021, en el sector La Selva, de la vereda Piedras Blancas del municipio de Guarne (coordenadas W75°30'16" N 6°18.2), a los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.430.038, quienes de acuerdo al Oficio N°S-2021-000205 RECAR-FUCAR-29.25 presentado por La Policía Nacional, el día 06 de enero de 2021, venían realizando la tala del material forestal incautado sin contar con la respectiva autorización expedida por la autoridad ambiental competente para desarrollar esta actividad

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

Que una vez, puesto a disposición de la Corporación la motosierra marca STIHL MS 170 Numero de referencia 11300213001 y el material forestal incautado, el cual se encuentra en custodia de CORNARE, en el CAV de Flora de la sede principal en el municipio de El Santuario, mediante el Auto PPAL-AU-00088 del 18 de enero de 2021, se dio inicio al Procedimiento Administrativo Sancionatorio de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 del 2009, en contra de los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.430.038. Que el día 2 de febrero de 2021, se hace entrega a título de depósito provisional la motosierra marca STIHL MS 170, numero de referencia 11200213001, al señor JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.063.279.733, previa autorización de su propietario el señor MAXIMO CESAR PEREZ GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N 71.211.392.

Que la medida preventiva impuesta mediante Auto con radicado Auto PPAL-AU-00088 del 18 de enero de 2021, fue:

IMPONER COMO MEDIDA PREVENTIVA a los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.430.038, el DECOMISO PREVENTIVO DE LA MOTOSIERRA marca STIHL MS 170 Numero de referencia 11300213001, y el DECOMISO PREVENTIVO DEL MATERIAL FORESTAL INCAUTADO el cual consta de cero punto veintiséis (0.26) metros cúbicos de madera Ciprés (*Cupressus lusitanica*) en rolo, la cual se encuentra en custodia en el CAV de Flora de la Corporación Sede Principal en el municipio de El Santuario Antioquia.

FORMULACION DE CARGOS

El artículo 5 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la Autoridad ambiental Competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

Que mediante Auto con radicado PPAL-AU-00797 del 08 de marzo de 2021, fue formulado a los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.430.038, el siguiente cargo:

- **CARGO ÚNICO:** *Aprovechar material forestal, consistente en: cero punto veintiséis (0.26) metros cúbicos de madera Ciprés (Cupressus lusitanica) en rolo, sin contar con la respectiva autorización expedida por la autoridad competente, Actuando así, en contravención con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.12.14. Del Decreto 1532 de 2019.,*

Que el Auto radicado PPAL-AU-00797 del 08 de marzo de 2021, se les notificó a los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.430.038, de forma personal mediante correo electrónico, ambos el día 08 de marzo de 2021 y de acuerdo al artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, contaron con un término de 10 días hábiles para presentar descargos, solicitar pruebas y desvirtuar las existentes. Oportunidad procesal de la cual no hicieron uso

DESCARGOS

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradicción y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un término de 10 días hábiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se informó sobre

la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito. Sin embargo JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS No hicieron uso de esta oportunidad procesal y decidió guardar silencio frente al cargo formulado.

INCORPORACIÓN Y PRÁCTICA DE PRUEBAS

Que mediante Auto con radicado N° 01960-2021 del 10 de junio, se incorporaron pruebas y se agotó la etapa probatoria, dentro del procedimiento sancionatorio adelantado en contra del a los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.430.038, integrándose como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental, las siguientes:

- Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre N° 0193859 con radicado PPAL-CE-00168-2021 del día 06 de enero de 2021
- Oficio N°S-2021/-000205 RECAR-FUGAR-29.25 presentado por La Policía Nacional, el día 06 de enero de 2021
- Acta de incautación de elementos varios, diligenciada por la Policía Nacional el día 04 de enero de 2021
- Acta de entrega a título de depósito provisional de una motosierra marca Sil HL MS 170, número de referencia 11300213001 al señor JOEL DE JESUS PEÑATE, previa autorización de su propietario.

Que en el mismo auto, se notificó de manera personal vía correo electrónico, el día 10 de junio del 2021, en él se dio traslado, a los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.430.038 para la presentación de alegatos, los cuales no fueron presentados en la oportunidad procesal para ello.

EVALUACIÓN DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA DECIDIR

De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la Ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados.

La protección del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para ello debe contar siempre con la participación ciudadana a través de sus deberes constitucionales, en especial de los consagrados en el artículo 8 superior "proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación", así como el numeral 8 del artículo 95, que prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar por la conservación de un ambiente sano".

De acuerdo a lo anterior, ha de entenderse que la normatividad Ambiental es de obligatorio cumplimiento y la violación de la misma acarrea la imposición de las sanciones legales vigentes. Así mismo, los actos administrativos que expide la autoridad ambiental en desarrollo de esa normatividad, deben ser observados en su integridad por parte del administrado y su desacato conlleva a la imposición de las respectivas sanciones legales.

Así las cosas, esta Corporación en el presente trámite administrativo de carácter sancionatorio no pueden ir más allá del cargo formulado en el Auto radicado PPAL-AU-00797 del 08 de marzo de 2021, esto es: *"Aprovechar material forestal, consistente en: cero punto veintiséis (0.26) metros cúbicos de madera Ciprés (Cupressus lusitanica) en rolo, sin contar con la respectiva autorización expedida por la autoridad competente"*.

Siguiendo este orden de ideas, le fue notificado a los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.430.038 del cargo formulado, para que pudieran ejercer su derecho a la defensa y se les brindó un término para que presentara los descargos que considerara pertinentes para desvirtuar el cargo formulado, garantizando con ello su derecho de defensa. Sin embargo JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS y JORGE ANDRES VASQUEZ decidieron guardar silencio frente al cargo formulado.

Acto seguido La Corporación, siguiendo lo reglado por el Consejo de Estado, con relación a la etapa de alegatos de conclusión, en su sentencia con radicado No. 23001-23-31-000-2014-00188-01 del 17 de noviembre de 2017, donde expuso que: *"La Sala resalta que las garantías integrantes del debido proceso administrativo imponen, ante el vacío que existe en la Ley 1333 frente a la etapa de alegatos de conclusión, la aplicación del artículo 47 del CPACA que al tenor indica que «(...) ARTICULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes (...)» haciendo a su vez aplicable artículo 48 del CPACA que contempla la etapa de alegatos de conclusión en la siguiente forma: (...) ARTÍCULO 48. PERIODO PROBATORIO. Cuando deban practicarse pruebas se señalará un término no mayor a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban practicar en el exterior el término probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) días (...) Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que presente los alegatos respectivos (...)»*. "El vacío legal expuesto ya ha sido estudiado por la doctrina, la cual es partidaria de la aplicación del artículo 48 del CPACA, en la siguiente forma: *«(...) Una enorme falencia de la Ley 1333 de 2009 es el silencio guardado en relación con la etapa de alegatos de conclusión, una etapa que se considera fundamental en este tipo de procesos, pues allí se permite a las partes hacer una valoración de todo lo actuado, antes de que la autoridad proceda a tomar una determinación sobre el particular. Aun así, se entiende que dicha omisión ha sido suplida por la norma general, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 pues en su artículo 48, aplicable a falta de mandato especial, se establece que una vez vencido el período probatorio es obligación de la autoridad dar traslado al investigado por el término de diez días para que presente los alegatos respectivos (...)»* concedió la oportunidad procesal los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.430.038, para la presentación de alegatos de conclusión, dentro del auto, N° 01960 de 10 de junio del 2021 por medio del cual se dio por agotada la etapa probatoria en el proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental que se lleva en su contra, de acuerdo al artículo 48 de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS y JORGE ANDRES VASQUEZ decidieron guardar silencio y no se pronunció en esta etapa procesal.

De acuerdo al principio de tipicidad objetiva, definido por la Corte Constitucional en sentencia C-996 del 02 de agosto del 2000, la cual, ha señalado lo siguiente: "El principio de legalidad, reconocido como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución, encierra el principio de tipicidad objetiva, que materializa el poder punitivo del Estado y sirve de marco funcional para la sociedad, en cuanto que lo que no se halle expresamente previsto en la ley como infracción penal no se considera prohibido a los particulares". Y haciendo una analogía en el proceso sancionatorio administrativo de carácter ambiental, esta Corporación en la etapa de formulación de cargos, debió guardar congruencia entre el hecho y la norma transgredida. Por lo tanto, se debe probar dentro de este proceso, que el JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS y JORGE ANDRES VASQUEZ estaban realizando el aprovechamiento de material forestal, consistente en: *cero punto veintiséis (0.26) metros cúbicos de madera Ciprés (Cupressus lusitanica) en rolo, sin contar con la respectiva autorización expedida por la autoridad competente, Actuando así, en contravención con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.12.14. Del Decreto 1532 de 2019*

Para llegar a esta certeza, la Corporación cuenta dentro de su material probatorio con los siguientes documentos: Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre N° 0193859 con radicado PPAL-CE-00168-2021 del día 06 de enero de 2021; Oficio N°S-2021/-000205 RECAR-FUGAR-29.25 presentado por La Policía Nacional, el día 06 de enero de 2021 Acta de incautación de elementos varios, diligenciada por la Policía Nacional el día 04 de enero de 2021; Acta de entrega a título de depósito provisional de una motosierra marca Sil HL MS 170, número de referencia 11300213001 al señor JOEL DE JESUS PEÑATE, previa autorización de su propietario. Los cuales señalan, la Policía Nacional, que los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.430.038, quienes de acuerdo al Oficio N°S-20211-000205 RECAR-FUCAR-29.25, el día 06 de enero de 2021, venían realizando la tala del material forestal incautado sin contar con la respectiva autorización expedida por la autoridad ambiental competente para desarrollar esta actividad. Hecho sobre el cual, no se pronunciaron los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.430.038 así como tampoco dentro de las etapas procesales definidas para ello, solicitó o allegó material probatorio que pudiese desvirtuar el cargo formulado. Por lo tanto, este Despacho considera que son suficientes las pruebas que existen dentro del proceso sancionatorio, quedando comprobado que los infractores no contaban con los permisos pertinentes para aprovechar el material incautado consistente, en *"cero punto veintiséis (0.26) metros cúbicos de madera Ciprés (Cupressus lusitanica) en rolo", Actuando así, en contravención con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.12.14. Del Decreto 1532 de 2019.*

De igual forma, no se pudo evidenciar la presencia de una causal eximente de responsabilidad dentro del procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio, consagradas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009, así como tampoco, se pudo demostrar alguna causal de atenuación de responsabilidad de las contenidas en el artículo 6° de la citada Ley 1333 de 2009.

CONSIDERACIONES FINALES

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente N° 053183437392, del procedimiento sancionatorio que se adelanta a los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.430.038 es claro para este Despacho y se puede afirmar con certeza, que el implicado violentó la normatividad ambiental y es

responsable frente al cargo endilgado por medio del Auto con PPAL-AU-00797 del 08 de marzo de 2021

Además, no hay evidencia que configure algunas de las causales eximentes de responsabilidad consagradas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definición de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al respecto, en las conductas descritas en los cargos que prosperaron, no es evidente la presencia de hechos imprevisibles e irresistibles.

Así mismo ha encontrado este Despacho, que, por mandato legal, en el procedimiento sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si éste no desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se establece una "presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situación ésta, no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental.

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los derechos subjetivos e intereses legítimos de los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.430.038 de forma tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y métodos establecidos para tal fin.

FUNDAMENTOS LEGALES

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional, conocida también como constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el artículo 79 superior que señala: *"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo."*

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines."

Es un derecho, pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas, la Ley 99 de 1993, en su Artículo 30° *"Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente."*

En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone *"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia"*

ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la Ley y los reglamentos.

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.

Artículo 5o. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

Parágrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión.

Decreto 1532 DE 2019: Artículo 2.2.1.1.12.14. Aprovechamiento de árboles aislados y de sombrío. Los árboles aislados podrán ser objeto de aprovechamiento para obtener productos forestales y será competencia de las autoridades ambientales regionales.

DOSIMETRIA DE LA SANCIÓN

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en el Decomiso Definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción, a los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.430.038 -por estar demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, de acuerdo a los cargos formulados mediante Auto PPAL-AU-00797 del 08 de marzo de 2021.

Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones que se deben imponer al infractor de las normas de protección ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado por la misma Ley.

En relación con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables se le podrá imponer entre otras medidas sancionatorias como el "Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción" al momento de dictarse la respectiva resolución, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009, el Decreto 1076 de 2015.

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones acorde a la gravedad de la infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decisión que conlleve la imposición de una sanción administrativa al seguir las siguientes instrucciones:

"Ley 1333 de 2009 en su artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de /a infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley. 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

(...) 5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción."

Que en atención a la solicitud de informe técnico y en virtud a lo contenido en el artículo 2.2.10.1.1.3, del Decreto 1076 de 2015, se generó el informe técnico con radicado 04848-2021 del 13 de agosto, donde se evalúa el criterio para el decomiso definitivo, en el cual se establece lo siguiente:

OBSERVACIONES:

Que los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS identificado con la cédula No. 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ identificado con la cédula No. 8.430.038 no presentaron descargos, por lo que no pudieron desvirtuar el cargo formulado dando por entendido que este aprovechamiento se realizó en forma ilegal, sin contar con autorización o permisos de las autoridades competentes.

De acuerdo con los documentos que contiene el expediente, las etapas del proceso se han agotado siguiendo el debido proceso, desde su incautación hasta la fecha, por lo que se debe proceder a imponer las sanciones correspondientes (principal y accesorias), como a continuación se describe:

a) PROCEDIMIENTO TECNICO CRITERIO de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.10.1.2.5. del Decreto 1076 de 2015. Los criterios para el decomiso definitivo como pena principal, se fundamentan en el literal (a) del artículo 2.2.10.1.2.5, el cual reza: "a) Los especímenes que se hayan obtenido, se estén movilizand, o transformando y/o comercializando sin las autorizaciones ambientales requeridas por la ley o los reglamentos, se impondrá como sanción por parte de las autoridades ambientales el decomiso definitivo de los especímenes".

CONCLUSIONES:

Que los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS identificado con la cédula No. 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ identificado con la cédula No. 8.430.038, cometieron infracción al ser sorprendidos aprovechando material forestal, sin contar con la respectiva autorización expedida por la autoridad competente, en contravención con lo establecido en el Artículo 2.2:1.1.12.14. Del Decreto 1532 de 2019. Cumplido el proceso preliminar de indagatoria, las etapas del proceso se han agotado, desde su incautación hasta la fecha, por lo que se debe proceder a imponer las sanciones correspondientes (principal y accesoria)”

Por mérito en lo expuesto se,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLES, a los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.430.038 del cargo formulado, Auto radicado Auto radicado PPAL-AU-00797 del 08 de marzo de por encontrarse probada la infracción ambiental por la violación a la normatividad ambiental señalada, acorde con la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER, a los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.430.038 una sanción consistente en el DECOMISO DEFINITIVO del material forestal consistente : *cero punto veintiséis (0.26) metros cúbicos de madera Ciprés (Cupressus lusitanica) en rolo*, material forestal que se encuentra en custodia en el CAV de Flora de la Corporación Sede Principal en el municipio de El Santuario Antioquia.

ARTÍCULO TERCERO: ENTREGAR definitivamente la motosierra marca STIHL MS 170 Numero de referencia 11300213001 a sus propietarios señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.430.038, toda vez que no se presta mérito suficiente para declarar el decomiso definitivo del mismo.

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuación a LA PROCURADURÍA AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo sancionatorios@cornare.gov.co

ARTÍCULO QUINTO: INGRESAR a los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.430.038 en el Registro Único Nacional de Infractores Ambientales, RUIA, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decisión.

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de CORNARE, a través de la página Web.

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente a los señores JOEL DE JESUS PEÑATE BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.063.279.733 y JORGE ANDRES VASQUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.430.038 , En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo, procede el Recurso de reposición, ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE FERNANDO MARIN CEBALLOS
Jefe de la Oficina Jurídica

Expediente N° 053183437392
Fecha: 28/09/2021
Proyectó: Armando Bahena
Revisó: Germán Vasquez
Dependencia: Bosques y Biodiversidad.